

La construcción de la sociedad neoliberal brasileña: ¿cuál es el lugar de la democracia?

*The Construction of the Brazilian Neoliberal Society: What is the Place of
Democracy?*

Loiane Prado Verbicaro*
Valeska Dayanne Pinto Ferreira*
Thayná Monteiro Rebelo*
Ana Victória Delmiro Machado*

Fecha de Recepción: 27/09/2021

Fecha de Aceptación: 10/12/2021

* Doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL). Profesor del Programa de Posgrado en Filosofía (PPGFIL) y del Programa de Postgrado en Derecho y Desarrollo Amazónico (PPGDDA), ambos vinculados a la Universidad Federal de Pará (UFPA). Máster en Derechos Fundamentales y Relaciones Sociales por la UFPA. Magíster en Ciencias Políticas por la UFPA. Pasantía de posdoctorado en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de São Paulo (USP). Líder del Grupo de Investigación - CNPq (UFPA): “Filosofía Práctica: Investigações em Política, Ética e Direito”. Miembro de la Red Brasileña de Mujeres Filósofas. Miembro del GT de Filosofía y Género de la Asociación Nacional de Postgrados en Filosofía - ANPOF. Correo electrónico: loianeverbicaro@uol.com.br. ORCID: 0000-0002-3259-9906.

* Maestranda en Derecho, en el área de concentración en Derechos Humanos y en la línea de investigación Constitucionalismo, Políticas Públicas y Derechos Humanos, por el Programa de Postgrado en Derecho de la Universidad Federal de Pará (PPGD-UFPA). Miembro del Grupo de Investigación - CNPq (UFPA): “Filosofía Práctica: Investigações em Política, Ética e Direito”. Correo electrónico: valeskadayanne@gmail.com. ORCID: 0000-0002-0110-9679.

* Maestranda en Derecho, en el área de concentración en Derechos Humanos y en la línea de investigación Constitucionalismo, Políticas Públicas y Derechos Humanos, por el Programa de Postgrado en Derecho de la Universidad Federal de Pará (PPGD-UFPA). Miembro del Grupo de Investigación - CNPq (UFPA): “Filosofía Práctica: Investigações em Política, Ética e Direito”. Correo electrónico: thaynamrebelo@gmail.com. ORCID: 0000-0002-7958-4453

* Maestranda en Ciencias Políticas, en la línea de investigación Instituciones judiciales y acceso a la justicia y la ciudadanía, por el Programa de Postgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Pará (PPGCP-UFPA). Miembro del Grupo de Investigación - CNPq (UFPA): “Filosofía Práctica: Investigações em Política, Ética e Direito”. Correo electrónico: victoriadelmiro@gmail.com. ORCID: 0000-0002-3388-5234

Resumen: *El artículo tiene como objetivo analizar cómo se estructura la democracia en del sistema capitalista neoliberal en el contexto brasileño. Mientras que el neoliberalismo requiere la liberalización del mercado, la reducción del estado social y la financiarización de la vida, la democracia presupone la igualdad política y económica, el aparato público y la inclusión, por lo que es necesario discutir esta relación conflictiva. La primera sesión del trabajo discute el sistema económico, político y social del neoliberalismo, entendiendo sus requerimientos y características, frente a las pretensiones democráticas, para adentrarse en las particularidades brasileñas. El segundo tema analiza la construcción de la sociedad neoliberal en el país, estableciendo la investigación a través del choque entre desarrollo social y avance neoliberal en Brasil. Finalmente, examina la presencia del capitalismo neoliberal desde los gobiernos del Partido dos Trabalhadores (PT) hasta los dos primeros años del gobierno de Bolsonaro, cuestionando el lugar de la democracia. Para ello, la investigación utilizó el método de enfoque deductivo y tipo de investigación bibliográfica y documental, con enfoque cualitativo. Como conclusiones, destacamos el obstáculo que impone el neoliberalismo para la realización de una democracia sustancial, igualitaria y plural, marginando su poder y restringiendo al ámbito electoral.*

Palabras clave: *Democracia – capitalismo neoliberal – Brasil – financiarización – justicia social*

Abstract: *The paper aims to analyze how democracy is structured within the neoliberal capitalist system in the Brazilian context. While neoliberalism requires market liberalization, reduction of the social state and financialization of life, democracy presupposes political and economic equality, public apparatus and inclusion, thus, it is necessary to discuss this conflicting relationship. The first session of the work discusses the economic, political and social system of neoliberalism, understanding its requirements and characteristics, as opposed to democratic pretensions, in order to enter into Brazilian particularities. The second topic analyzes the construction of neoliberal society in the country, establishing the investigation through the clash between social-development and neoliberal advancement in Brazil. Finally, it examines the presence of neoliberal capitalism from the Partido dos Trabalhadores (PT) governments to the first two years of the Bolsonaro government, questioning the place of democracy. For this, the research used the method of deductive approach and type of bibliographical and*

documentary research, with a qualitative approach. As conclusions, we highlight the obstacle that neoliberalism imposes to the realization of a substantial, egalitarian and plural democracy, marginalizing its power and restricting it to the electoral sphere.

Keywords: *Democracy – Neoliberal capitalism – Brazil – Financialization – Social justice*

Una difícil conciliación entre capitalismo y democracia es un contenido abordado por varios investigadores preocupados por la supervivencia del principio democrático en el mundo capitalista, especialmente en la era del capitalismo neoliberal (Brown, 2019). Si la democracia es el espacio de la igualdad política y el sistema capitalista se basa en la creación de ganadores y perdedores, el oxímoron del capitalismo democrático sólo es posible a través de una regulación fuerte y eficaz, capaz de compensar las desigualdades inherentes al capitalismo a través de la justicia social (Streeck, 2018).

O el término “neoliberalismo” fue apodado por primera vez en el coloquio Walter Lippman en 1938, aunque sin ninguna precisión técnica definitiva. A partir de ahí, sus discusiones rompen con el liberalismo clásico del siglo XIX, con el objetivo de cambiar los supuestos básicos de este sistema para hacer frente al socialismo. De esta manera, el neoliberalismo no es un continuador del *laissez-faire*, sino un refundador nacido con la crisis económica, política y doctrinal que rodeó al liberalismo (Dardot y Laval, 2016).

Para Harvey, el neoliberalismo es una teoría de prácticas político-económicas que requiere una liberalización a nivel gubernamental e individual basada en las libertades, fundando una estructura institucional que luche por la propiedad privada, los mercados libres y el libre comercio. El rol del Estado se convierte en protector de estas prácticas, aumentando su dominio de las estructuras policiales, defensivas y legales para garantizar los derechos directos de propiedad individual, asegurando el desarrollo del mercado (Harvey, 2014).

Si bien es importante entender el neoliberalismo en su vertiente económica y política, Dardot y Laval (2016), influenciados por Foucault, argumentan que también es

necesario entenderlo como un sistema normativo que forma relaciones sociales a partir de la lógica del capital, irradiando a través de todos los ámbitos de la vida.

La dinámica neoliberal fundada en el capital financiero y la apertura económica, sin embargo, condujo a la crisis del Estado fiscal y al paso del Estado dividido, ahora significativamente dependiente de las inversiones financieras para su sostenibilidad (Streeck, 2018). A medida que la nueva formación de los Estados-nación pasa a depender del mercado financiero, esto requiere un entorno sin la interferencia de razones morales (justicia social), de un lado, y, por otro, una acción estatal fuerte a favor de la justicia de mercado - operando según el criterio de productividad-límite individual, avalado por el propio mercado y sustentador de las desigualdades.

En esta coyuntura, la democracia está en constante prueba, incluso su lugar en las sociedades neoliberales, marcadas por el conservadurismo, jerarquías, explotaciones y violaciones de los derechos humanos, en nombre del mantenimiento del ciclo capitalista neoliberal. Eso refuerza los argumentos según los cuales es el momento de la posdemocracia (Dardot y Laval, 2016).

El caso brasileño tiene peculiaridades típicas de un país colonizado, un pasado autoritario, una economía dependiente y marcada por el proceso de transición democrática de las dos décadas del 70 y 80. Por lo tanto, el análisis del desarrollo del neoliberalismo en Brasil no puede ignorar estas especificidades, ni ser investigado con el fin de aplicar plenamente al contexto nacional, sin reflexión, estudios dirigidos a escenarios norteamericanos y europeos.

El contexto de la redemocratización en Brasil estuvo marcado por (i) una élite interesada en mantener la estructura de dominación existente; (ii) una burguesía con dificultades económicas, dividida en dos grupos, uno orientado a la renovación de la industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI) y el otro con una lógica neoliberal, que defendió la restauración de la democracia como necesaria para el neoliberalismo; (iii) un gobierno militar interesado en su amnistía y en mantenerlo como guardián de la seguridad nacional; (iv) movimientos sociales de muchos estudiantes y trabajadores, principalmente. En este contexto, la lógica de la apertura política gradual,

proveniente de dos altos escalones militares y élites políticas, no apuntaba a la restauración democrática, sino a construir una base estable que permitiera la transferencia del poder a líderes cívicos conservadores en los que confían los militares. (Saad Filho y Morais, 2018).

Por un lado, el pacto político en torno a la Nueva República central se centró en garantizar las libertades políticas y el reconocimiento de la ciudadanía a los pobres y de la clase trabajadora, con la recepción de ganancias económicas marginales. Por otro lado, se mantuvo el sistema de desigualdades, dominación y hegemonía económica de las élites, así como la protección de los militares frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos (Saad Filho y Morais, 2018). Desde el punto de vista del sistema político, la preservación del conservadurismo y las desigualdades fue garantizada sucesivamente por figuras de la élite política conservadora.

Por otro lado, la introducción del embrión social-desarrollista en el texto constitucional es innegable, a través de normas programáticas y derechos sociales de carácter transformador, comprometidos con una idea de socialdemocracia, demostrando que los movimientos sociales también han logrado imbricar, aunque de manera inconexa, sus intereses en la constitución de 1988 (Nobre, 2013). La promesa de justicia social estaba, entonces, más viva desde la redemocratización.

Sin embargo, la transición a la democracia (1975-1988) fue seguida por la transición al neoliberalismo (1988-1999), este último basado en una lógica excluyente de financiarización, concentración del ingreso, marginación de ciertos segmentos sociales y deterioro de las condiciones de vida y de trabajo (Saad Filho y Morais, 2018). Con la apertura del mercado, las privatizaciones y el fomento del consumo, se construyó y mantuvo una forma específica de sociedad en Brasil, incluso durante gobiernos más progresistas: una sociedad con una matriz neoliberal, basada en nuevos y viejos conservadurismo; en la reproducción de privilegios y jerarquías; así como en la lógica de la ascensión social meritocrática.

La casi simultaneidad entre los procesos de transición democrática y neoliberal impone preguntas inevitables sobre la vigencia del principio democrático, en términos

de una forma de vida inclusiva e igualitaria, en el escenario brasileño. Con la redemocratización se creó un ambiente agradable al neoliberalismo, pero ¿cuál es el lugar de la democracia en este contexto? ¿Cuál es el nivel democrático aceptable dentro de la sociedad neoliberal brasileña? ¿Cuáles son los límites impuestos por el neoliberalismo a la democracia en el caso de brasileño?

Este artículo tiene como objetivo proporcionar un análisis de la forma de democracia que ha sido tolerada por la racionalidad neoliberal brasileña. Para ello, utilizamos un método de investigación deductivo, y el tipo de investigación como bibliográfica y documental, con enfoque cualitativo, con el fin de comprender, en el contexto de la construcción de la sociedad neoliberal brasileña, en qué medida se tolera y se inserta la democracia, considerando también el evaluación comparativa entre administraciones en base a las principales políticas públicas desarrolladas.

Estructuralmente, la obra consta de tres secciones. En el primero, buscamos comprender la correlación entre capitalismo y democracia, especialmente en la era neoliberal a un nivel macro y más global, con el fin de comprender los fundamentos del sistema neoliberal. Secuencialmente, analizamos cómo se llevó a cabo la construcción de la sociedad neoliberal en Brasil, en paralelo a un posible proyecto de socialdemocracia, con el fin de demostrar la relación de tensión que se establece entre capitalismo neoliberal y régimen democrático en el contexto de un país latinoamericano con una economía dependiente. Al final, haremos un balance, desde la progresismo de izquierda de los gobiernos del *Partido dos Trabalhadores (PT)* hasta las repercusiones de los dos primeros años del gobierno de Bolsonaro, demostrando lo que prevaleció en el choque entre la lógica excluyente del neoliberalismo y el carácter inclusivo del proyecto social-desarrollista.

Capitalismo neoliberal y democracia: un (im)posible balance

El capitalismo neoliberal debe entenderse más allá de los aspectos económicos y financieros, pero también por sus consecuencias en la política, la sociedad, la cultura y

el medio ambiente (Fraser y Jaeggi, 2020). Ante esta amplitud que rodea al capitalismo, sobre todo al trabajo y al neoliberalismo, se cuestiona el lugar de la democracia. Este tema tiene como objetivo analizar esta relación de manera global, afinando las ideas para entrar en el caso brasileño.

Contrariamente a lo que puede entenderse superficialmente, el neoliberalismo no exige la ausencia de intervención del Estado en la esfera económica como idealiza el liberalismo clásico. El capitalismo financiarizado requiere una regulación política en la economía, para que el mercado se imponga e inmune de las demandas sociales y políticas, neutralizándolas (Streeck, 2018). En este sentido, el mercado neoliberal ya no debe entenderse como un lugar para la circulación de bienes de forma natural y regido por leyes naturales que tienden al equilibrio, en acuerdo con las ideas del *laissez-faire*. Es un proceso que articula la intervención política, es decir, el Estado, así como las motivaciones psicológicas y competencias específicas del sujeto (Dardot y Laval, 2016).

El filósofo y economista neoliberal, miembro de la Escuela Austriaca, Friedrich Hayek defendió que el orden de mercado debería tener como uno de los principales apoyos la intervención estatal a través de su asistencia legal, que cambiaría las nociones sociales y democráticas sobre derechos. Esto conduciría a una sociedad de libertades y derechos individuales, que prioriza y protege la propiedad privada, los mercados y el libre comercio, eliminando todo el aparato social, visto como una patología y anomalía. Este proyecto, de esta manera, debe diseñarse incluso si hubo destrucción de la democracia, ya que, para el autor, la única forma admisible de democracia es la limitada que no obstaculiza las libertades de mercado y la propiedad privada (Hayek, 1981; Dardot y Laval, 2016).

A partir de esto, se entiende que la democracia sólo se acepta si no interfiere con la lógica de producción y concentración de la renta, la riqueza y la propiedad. Por un lado, sirve como un mero instrumento de elección electoral con el sesgo del funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Por otro lado, se despoja de su propósito de proteger los derechos sociales y colectivos, en el momento en que el Estado y sus instituciones rompen con este compromiso político, sirviendo al mercado y

despolitizando a las masas.

A partir de esto, se entiende que la democracia sólo se acepta si no interfiere con la lógica de producción y concentración de la renta, la riqueza y la propiedad. Por un lado, sirve como un mero instrumento de elección electoral con el sesgo del funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Por otro lado, se despoja de su propósito de proteger los derechos sociales y colectivos, en el momento en que el Estado y sus instituciones rompen con este compromiso político, sirviendo al mercado y despolitizando a las masas.

La democracia capitalista, que se vio en equilibrio hasta 1970, dio paso a estos arreglos, inmunizando la economía contra las bases de la democracia de masas, legitimando una mayor liberalización del mercado en detrimento del estado de bienestar. En base a esto, la relación entre capitalismo y democracia, lejos de encontrar estabilidad en el tiempo, mostró una fuerte tensión, que se intensifica aún más con el avance neoliberal. Para Streeck, la asociación entre capitalismo y democracia en la posguerra no fue obvia, debido a la oposición intrínseca entre los regímenes, que operan bajo principios de distribución en competencia. La idea de “capitalismo democrático” que surgió después de la Segunda Guerra Mundial fue aceptada por un corto período en vista del equilibrio entre la acumulación capitalista y los avances sociales del estado de bienestar (Streeck, 2018).

En este sentido, la economía política del “capitalismo democrático” se basó en la improbable combinación de dos opuestos, que Streeck llama “justicia de mercado” y “justicia social”. El primero implica la distribución de los resultados de producción evaluados por el mercado sobre el desempeño individual de los involucrados. La justicia social, por su parte, toma en cuenta los conceptos de igualdad, honestidad y reciprocidad, entendiendo que toda persona tiene derecho a un mínimo para vivir, independientemente del desempeño individual a nivel económico, además de reconocer los derechos civiles y humanos (Streeck, 2018).

Mientras que la "justicia de mercado" ve las demandas de la justicia social como peligrosas para el funcionamiento del mercado - ya que vincula los resultados

económicos a los parámetros morales de igualdad. El principio de “justicia social” entiende la lucha de clases en el régimen democrático como esencial para la corrección de las desigualdades distributivas, centrando el debate en el ámbito político a partir de las relaciones de poder que diferencian a cada persona. Los mercados, por el contrario, ven a sí mismos como apolíticos, dado que su distribución responde a parámetros universales, entendiendo a las personas como abstractas, sin considerar las escisiones sociales, históricas y opresivas que las acompañan. Desde el punto de vista de la racionalidad formal del mercado, la “justicia social” es vista como una amenaza constante, ya que puede llegar al poder estatal por mayoría democrática y cambiar su modo de funcionamiento (Streeck, 2018).

La defensa de esta “justicia de mercado” está ganando cada vez más adeptos en el capitalismo neoliberal. Ante la propaganda de que el mercado no es corrupto ni está impulsado por el odio y los prejuicios, se basa en la distribución de la renta y la riqueza por parámetros objetivos, imparciales y generales. En base a esto, se propaga, especialmente por los economistas, que el mercado está libre de explotación, ya que trata a todos como iguales y con iguales capacidades para producir cada vez más, con el fin de aumentar sus ganancias, eliminando la necesidad de intervención política y social para el debate democrático (Streeck, 2018).

Esto lleva a que todas las decisiones sobre la vida no se decidan por procesos democráticos colectivos, sino por el mercado. El capitalismo neoliberal se estructura en mercantilizar los valores de la vida, desarraigando los derechos sociales, económicos y políticos, de modo que el capital sea el sujeto, considerado justo, para distribuir la riqueza. La igualdad y la libertad prometidas por el capitalismo se estructuran de manera universalizadora, ignorando las diferencias - en las esferas de raza, clase, género, etnia, nacionalidad - que solo pueden ser mitigadas o reducidas por la regulación estatal para proteger las bases mínimas de distribución del ingreso y la riqueza, es decir, dentro del ámbito democrático y no mercantil (Fraser y Jaeggi, 2020).

La sociedad capitalista compromete la participación democrática y la toma de decisiones colectivas. Al constituir el capital como sujeto de decisiones sobre el

excedente de producción, el poder colectivo y la agenda política democrática se truncan, restringiendo el poder colectivo y la autonomía, poniéndolo bajo el control de los sujetos e instituciones del mercado neoliberal -apoyado por el Estado- el aparatos social, político, legal y económico, legitimando la igualdad formal que sustenta la explotación y la consecuente desigualdad económica (Fraser y Jaeggi, 2020).

Al entender que uno de los pilares de la democracia es el equilibrio económico en la sociedad, como lo destaca Sitaraman (2018), queda claro que la economía neoliberal no satisface esta condición y mucho menos pretende hacerlo. Sobre esta base, la democracia está estructurada y es bienvenida solo cuando legitima, por medios democráticos, que el mercado obtenga resultados antidemocráticos. Por tanto, Streeck sostiene que se vive el “proceso de desdemocratización del capitalismo a través de la deseconomización de la democracia.” (Streeck, 2018, p. 55, nuestra traducción), quitando el poder democrático frente a las exclusiones del capital.

En este sentido, el capitalismo neoliberal requiere de un Estado fuerte que proteja los intereses del mercado, colocándolo como un instrumento político necesario para que el aparato social se reduzca. Esto no ocurre solo a nivel institucional del Estado, sino también en la forma en que el neoliberalismo impone la reeducación de los ciudadanos, para que se vean responsables de producir cada vez más y de sostener su costo de vida sin ayudas estatales. A partir de esto, se entienden las políticas de austeridad para el desmantelamiento de los sectores sociales de educación, salud, seguridad social, flexibilización de las leyes laborales y degradación del poder sindical, contrarias a la igualdad política que exige la democracia (Fraser y Jaeggi, 2020; Streeck, 2018; Brown, 2019).

Por tanto, aún es necesario analizar los aspectos que atentan contra la democracia, no solo en el aporte económico y político, como se ha señalado hasta ahora. Considerando que el neoliberalismo es un sistema económico, pero también social, cultural y político, que construye subjetividades según su lógica.

La justicia social es la única forma de mantener la democracia, que nunca se ha cumplido y aún más erosionada en el capitalismo neoliberal. El neoliberalismo niega la

distribución adecuada, la igualdad política y crea sujetos considerados libres y auto-responsables, lo que justifica la reducción del estado social para mercantilizar todas las esferas de la vida. El desmantelamiento neoliberal de las garantías básicas se ve cuando se niega la existencia de la sociedad/pueblo, cuando se privatiza el estado social y cuando se utiliza el discurso de las libertades para legitimar la injerencia del mercado (Brown, 2019).

Teóricos neoliberales como Von Mises y Hayek consideran que la máquina económica tiende a equilibrarse cuando no es perturbada por el moralismo o las intervenciones sociales y políticas, de manera consistente con lo que se ha argumentado hasta ahora en vista de su posición universalista y abstracta en la distribución de ingresos y riqueza. Ocurre que para esta conformación social se forma la lógica subjetiva de la competencia (Dardot y Laval, 2016).

Así, la competencia que demandan los ciudadanos, a través de procesos psicológicos, es la formación del sujeto emprendedor. El sujeto no es del intercambio, que se preocupa por la equivalencia, sino que ve una oportunidad, toma decisiones y obtiene ganancias. Este proceso no se encuentra solo en el ámbito económico de maximizar el valor asumido, sino también en una dimensión “extra-economizadora” de la elección de buenas oportunidades. Así, el mercado, compuesto por ambas vertientes, conduce a la formación del yo competitivo, productivo, estratégico, atento y desvinculado del colectivo (Dardot y Laval, 2016).

Se entiende que cada sujeto es un potencial emprendedor en todos los ámbitos de su vida, tomando decisiones para maximizar los resultados. El sujeto del neoliberalismo es el ser competitivo; discurso, que estandariza a todos en base a los supuestos de una empresa. El neo-sujeto es aquel que se involucra plenamente en su actividad profesional, para que entienda que trabaja para sí mismo y no para una empresa, por lo que no se discute todo su esfuerzo, dedicación, sacrificio, ocultando la explotación del mercado capitalista neoliberal (Dardot y Laval, 2016).

El sujeto entiende a sí mismo como una "empresa de sí mismo" cuando está dispuesto a actuar con los fines de una empresa, que busca siempre el lucro, la

adaptabilidad y las buenas oportunidades, con esto, se quita el sentimiento de alienación, ya que el individuo no actúa para la empresa, sino para usted, a pesar de que alimenta a la empresa. La relación contractual y la necesidad de una docilidad de los cuerpos para trabajar ya no son los medios utilizados, ya que el sujeto neoliberal rompe estas necesidades al querer involucrarse plenamente en su actividad, fortaleciendo cada vez más su capital humano, es decir, su propiedad: la mano de obra (Dardot y Laval, 2016).

En base a esto, el sujeto se ve a sí mismo como responsable de proteger y valorar su propiedad, después de todo, ya no es el proletario que no tiene nada. En este sentido, se amolda a ser abierto y estratégico para tomar sus decisiones, promoviendo su productividad y eficiencia, haciéndose el único responsable de todo lo que le suceda. La estrategia neoliberal es la formación subjetiva para que cada sujeto se vea a sí mismo como responsable de su éxito y fracaso (Dardot y Laval, 2016), consolidando la idea meritocrática de que el esfuerzo, el diferencial y la productividad son los únicos y necesarios caminos para el ascenso individual, ignorando las diferencias de género, raza, etnia, nacionalidad y clase como puntos cruciales que no colocan a todos en el mismo nivel sin el aporte de la democracia material.

La hegemonía neoliberal destruye lo social y con él todos los instrumentos de garantías, demandas públicas y aparatos colectivos que pueden cuestionar esta realidad excluyente que produce dominación, desigualdad y opresión. El borrado de este escenario por el neoliberalismo confunde subjetividades y establece que lo social ya no se defiende. La racionalidad neoliberal entiende lo social y sus instrumentos como la tiranía de lo políticamente correcto, que reconfigura la comprensión de la igualdad y la inclusión (Brown, 2019).

Este ataque a lo social es el medio para el proceso de desdemocratización, debido a las fuerzas del mercado que legitiman el Estado para construirse contra la democracia, profundizando las desigualdades, opresiones y dominaciones, inherentes al sistema capitalista, deshilachado, en neoliberalismo (Brown, 2019; Verbicaro, 2021). La democracia requiere de la igualdad política como vía para consolidar la justicia redistributiva y el adecuado reconocimiento (Fraser, 2015). Se percibe que este camino

de emancipación a través de la democracia es tortuoso frente a las fuerzas neoliberales.

La democracia enfrentada y reducida por el neoliberalismo se traduce más allá de una idea de democracia mínima o restringida al ámbito electoral, pero sobre todo ligada sustancialmente a la idea de igualdad política. Si bien no proponemos un concepto ni un modelo cerrado de democracia para este trabajo, entendemos que la democracia amenazada por el neoliberalismo se refiere a todos los aspectos democráticos de defensa de los derechos sociales, económicos y políticos, basando sus políticas en la distribución equitativa, el reconocimiento y la representación de los derechos humanos, grupos sociales en instituciones formales de manera equitativa (Brown, 2019; Fraser, 2015).

Wendy Brown analiza que la democracia reducida por el neoliberalismo es la que lucha por la justicia social y la realización de los derechos sociales. De esta forma, la autora sostiene que la democracia requiere de un vínculo necesario con lo político, para poder gestionarlo como un gobierno del pueblo y para el pueblo. La democracia, desde este punto de vista, se basa en la deliberación, la impugnación y el intercambio de valores inclusivos que garantizan la igualdad, el pluralismo, el secularismo y la inclusión. Así, la igualdad política constituye la base del régimen político democrático, que presta atención a las disparidades sociales, económicas y culturales, para enfocarse y defender la justicia social (Brown, 2019).

Por lo tanto, es fundamental discutir las bases neoliberales y democráticas en el contexto brasileño, que tiene peculiaridades sobre su sistema político, social y económico, para comprender, tomando en cuenta los supuestos discutidos en esta sección, para establecer (in)compatibilidad entre democracia y neoliberalismo en Brasil.

Transición democrática y neoliberalismo en Brasil: del carácter transformador al alojamiento en una sociedad neoliberal

La estructura estatal brasileña está marcada por elementos de patrimonialismo, neoliberalismo y desarrollismo social, que establecen fuertes tensiones entre sí y expresan conflictos distributivos inherentes a las sociedades capitalistas. Para

comprender tal estructura, primero necesitamos una dosis de historia.

Para Avritzer (2019), el patrimonialismo en el país tiene una línea histórica bien definida, que se basa principalmente en centralizar a los contratistas como principales socios económicos; entrelazar el campo estatal y privado no sólo en áreas productivas, sino también en las estructuras del Banco nacional de desarrollo económico y social (BNDES), Banco central (BC) y bancos públicos; así como fortalecer el Poder Judicial, manteniendo la estructura clientelista.

La estructura patrimonialista se remonta a los años 1930 y está asociada al proceso histórico de “apropiación del Estado brasileño por diferentes grupos estatales o paraestatales”. En la década de 1930, el gobierno de Vargas inició procesos de modernización burocrática estatal y organización del desarrollo, basados en el clientelismo. En esta fase, el Estado ejerció las funciones de regulador de actividades económicas y constructor de infraestructura. Juscelino Kubitschek continuó el proceso de modernización económica con importantes obras estructurales, a través de contratos no transparentes de gran importancia económica con contratistas, marcando acciones patrimoniales (Avritzer, 2019, nuestra traducción).

El orden patrimonialista y desarrollista se mantuvo en Brasil, bajo el sistema de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)¹, aun cuando el país sucumbió al autoritarismo en 1964. El período dictatorial brasileño fue sistemáticamente reproductor de desigualdades, manteniendo este orden a través de la coerción militar. En este contexto, la inflación funcionó como un mecanismo importante para reproducir los patrones históricos desiguales de distribución del ingreso y garantizar un rápido crecimiento, requerido por el sistema de acumulación en ese momento, el ISI (Nobre, 2013).

El escenario de inflación creciente que se inició en 1970 llevó a Brasil a alcanzar

¹ El ISI fue el segundo sistema de acumulación establecido en Brasil. El primero de ellos fue el crecimiento primario-exportador que duró de 1822 a 1930. A partir del gobierno de Vargas, en la década de 1930, se instauró la industrialización por sustitución de importaciones dentro de un estado desarrollista, continuando hasta la década de 1980, cuando Brasil fue cooptado por un nuevo sistema de acumulación, el neoliberalismo (Saad Filho y Morais, 2018).

una tasa de inflación superior al 300% en 1986, aún teniendo grandes dificultades para estabilizar la economía brasileña. El escenario hiperinflacionario, asociado a la indexación diferencial de precios e ingresos, también intensificó el cuadro de desigualdades, intensificando los conflictos distributivos. (Saad Filho y Morais, 2018). La persistencia de altas tasas de inflación, producto de eventos internacionales (los dos choques petroleros y el choque Vocker) y el fracaso de los planes de estabilización, llevaron a un escenario en el que la inflación dejó de jugar su papel como instrumento central en el arreglo de las desigualdades brasileñas, pero, por el contrario, amenazó la supervivencia del país y perjudicó a grupos históricamente favorecidos por este mecanismo (Nobre, 2013).

Cuando la hiperinflación, sumada al endeudamiento externo y la consecuente crisis del ISI, no logra generar un crecimiento acelerado, el apoyo del régimen autoritario encuentra serias dificultades de mantenimiento y las demandas de la democracia toman la forma de manifestaciones políticas y sociales contundentes, a medida que adquieren espacio con las élites, ya que el régimen militar ya no aseguraba sus intereses y su hegemonía económica (Saad Filho y Morais, 2018).

Es decir, se juntaron tres fenómenos: hiperinflación, crisis del modelo nacional-desarrollista (ISI) y demanda de redemocratización. De esta manera, el proceso democratizador no puede ser estudiado separadamente de la crisis del sistema de acumulación que solía estar vigente (el nacional-desarrollismo en la lógica de la industrialización por sustitución de importaciones), ya que estos se influyeron mutuamente. Respecto a esta correlación, Saad Filho y Morais (2018) observan dos procesos que ocurren casi simultáneamente: la transición a la democracia (1974-1988) - que siguió la senda de la expansión de la ciudadanía y la implementación de un estado de bienestar social (1988-1989) - y la transición al neoliberalismo, según una lógica excluyente de financiarización, concentración de ingresos y deterioro de las condiciones laborales.

A medida que crecía la presión de la creciente oposición al gobierno militar, los militares y las élites buscaron formas de controlar el proceso de redemocratización y

mantener sus posiciones en el régimen venidero. Dentro de esta estrategia, Geisel dio paso a una apertura política lenta, gradual y controlada, cuyo objetivo era “(...) construir una base estable que apoyara el traspaso del poder a líderes civiles conservadores a quienes los militares consideraban creíbles” (Saad Filho y Morais, 2018, p. 75, nuestra traducción), con el objetivo de establecer un acuerdo constitucional que mantenga a las Fuerzas armadas como guardianas de la seguridad nacional y les garantice la amnistía. No es de extrañar que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se haya realizado mediante una enmienda a la Constitución autoritaria de 1967 (Enmienda constitucional 26/1985), que, en esa medida, amplió la amnistía en beneficio de los militares.

En el momento constituyente, sin embargo, estaba claro que el Congreso Nacional no podría aislarse por completo de las demandas sociales, ni controlar sistemáticamente el trabajo. La organización del funcionamiento interno de la Asamblea Constituyente, según lo establecido en sus estatutos², permitió una amplia movilización y participación social en su primera fase. Gracias a la apertura a las demandas de la sociedad y a la articulación de Mário Covas para señalar a la relatoría de las comisiones y subcomisiones temáticas parlamentarias más alineadas con su posición política progresivamente sesgada, fue posible incorporar al proyecto constitucional ciertos requisitos de carácter sustancialmente igualitario. El Congreso Constituyente, sin embargo, estuvo compuesto por una mayoría conservadora, que, en el momento de la votación en el pleno, promovió una gran articulación política ("centrão") para cambiar el reglamento interno – para facilitar la modificación del proyecto de constitución – y dispositivos de exclusión demasiado progresistas para el paladar de la élite política conservadora (Barbosa, 2012).

Aun así, como acertadamente afirma Nobre (2013), en la Constitución de 1988 se plantó un embrión del desarrollismo social. Por ello, el mero cumplimiento de las

² Según los estatutos, el proceso constituyente se dividiría en dos etapas. En la primera fase, los mandantes se distribuyeron en ocho comisiones temáticas, cada una de las cuales se subdividió en tres subcomités. El trabajo resultante de cada comisión sería enviado a la Comisión de sistematización, cuya función era organizar y presentar el proyecto de constitución. La segunda fase consistió en la deliberación y votación, en plenario, del proyecto presentado por el comité de sistematización (Vieira, 2018)

formalidades electorales y la alternancia del poder político no se corresponden con la propuesta de democracia constitucional inscrita en la Constitución de 1988, que tiene un sesgo transformador y sustenta una vida política sustancialmente democrática (Nobre, 2013). De esta manera, la evaluación de la salud constitucional brasileña adecuada depende al menos de los elementos, a saber, la estabilidad constitucional y el desempeño de sus objetivos sociales (Magalhães; Ferreira, 2021). En ese sentido, el texto constitucional de 1988 se incrustó en un concepto democrático sustancial, comprometido con la realización de los derechos y la reducción de las desigualdades, aunque de manera embrionaria y dependiente de la acción positiva del Estado para implementar tales disposiciones constitucionales.

Por otro lado, el tono patrimonialista siguió presente en el nuevo régimen constitucional, a través del fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, especialmente por el exceso de beneficios conferidos a la corporación jurídica (poder y autonomía funcional), representando una nueva forma de apropiación privada del Estado, cuyo núcleo tiene una disposición constitucional (Avritzer, 2019). En sentido similar, Saad Filho y Morais (2018) enfatizan que el pacto político que apoyó a la Nueva República atendió las demandas inmediatas de la izquierda (garantizó una amplia libertad política, reconoció la ciudadanía de los pobres y del proletariado, además de brindar con ganancias económicas marginales), sin embargo, ignoraron en gran medida las demandas económicas que tenían un tono redistributivo.

El tercer elemento de la estructura estatal brasileña se introduce en nuestro país bajo el discurso y justificación de la estabilización monetaria, según el cual superar tanto la hiperinflación como la vulnerabilidad económica externa de Brasil sólo sería posible mediante la modernización de la economía y la sociedad según la lógica de neoliberalismo, es decir, con la reducción de la intervención del Estado en el espectro económico, lo que se haría a través de la liberalización económica (comercio, finanzas y flujos internacionales de capitales), privatizaciones extensivas y la reducción de gastos a través de reformas tributarias y previsionales. El sello político del neoliberalismo en el estado brasileño, a su vez, llegó con las elecciones presidenciales de 1989, cuando el

programa neoliberal de Fernando Collor derrotó electoralmente la campaña del candidato de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien el expresidente Collor estuvo involucrado en escándalos de fraude y corrupción, que lo llevaron a su juicio político, su breve período en el cargo, así como el de su sucesor, Itamar Franco, estuvo marcado por una política monetaria contractiva, con el fin de controlar la inflación, atraer capital extranjero y generar excedentes exportables (Saad Filho y Morais, 2018).

Con el *Plano Real* llegó la apertura económica del país y la armadura ideológica del neoliberalismo, es decir, se trataba de un proyecto económico-político de dimensiones globales. Bajo la lógica neoliberal, Fernando Henrique Cardoso (FHC) presentó como inevitable el *Plano Real* y, para triunfar en este discurso, utilizó el control de la inflación -lo que permitió un apoyo popular significativo- y una alianza con la élite política conservadora - el fin de ser capaz de implementar las reformas constitucionales necesarias para la realización del proyecto de estabilización (Nobre, 2013).

Es desde el *Plano Real* que autores como Saad Filho y Morais (2018) ven la consolidación del neoliberalismo en Brasil como una nueva forma de sistema de acumulación de capital, en sustitución de la antigua industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Para estos autores, el plan iniciado en 1994 habría implementado una estrategia económica totalmente neoliberal, proporcionando los sustratos políticos e ideológicos necesarios para la legitimación política del neoliberalismo, especialmente a partir del primer mandato de Fernando Henrique Cardoso.

El éxito inicial del *Plano Real*, debido a la reducción segura de la inflación y la implementación de reformas de neoliberalización, no solo generó ganancias para las élites, sino también para las clases pobres (Saad Filho y Morais, 2018). Sin embargo, el Plano Real no tardó en señalar su colapso: los cambios en los flujos internacionales de capital, especialmente en 1997 y 1998, asociados a las debilidades creadas por las reformas neoliberales, llevaron a la crisis del plan de estabilización iniciado por Fernando Henrique Cardoso en 1994 (Saad Filho y Morais, 2018). Aún así, luego de la transición al neoliberalismo, la economía brasileña se mantuvo desigual, dependiente y generadora de pobreza, con un plus de bajo crecimiento, ya que su desempeño está limitado por la

amenaza de crisis cambiarias y de balanza de pagos (Saad Filho y Morais, 2018).

A pesar de los indicios de liberalización económica y los discursos alineados con el neoliberalismo que se utilizaron cuando se introdujo el *Plano Real* en Brasil, no podemos afirmar su completa implantación y consolidación a partir del período Fernando Henrique Cardoso en adelante. Como hemos visto hasta ahora, el aspecto patrimonial se ha establecido firmemente en Brasil, desde la era Vargas, de tal manera que no ha sido superado ni siquiera durante el proceso de redemocratización brasileño. Asimismo, el “consenso neoliberal” establecido en las administraciones de Fernando Henrique Cardoso no logró romper con el patrimonialismo, ya que la apuesta liberal no implicó innovación económica, ni admitió la regulación de la propiedad. Además, las privatizaciones del período no solo fueron articuladas por el Estado, sino también financiadas por éste. Durante este período, el Estado brasileño también jugó el papel de controlador de súper empresas, como *Petrobras* y *Eletrobrás*, y financiador de grandes proyectos, mediado por préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), además de tener una nueva estructura de patrimonialismo relacionado con la expansión de los beneficios de la corporación legal. En el contexto de las privatizaciones, la energía, la electricidad, el petróleo y casi todos los bancos públicos quedaron bajo control estatal, por lo que la privatización sólo ha llegado a áreas secundarias de la política de desarrollo (Avritzer, 2019).

De esta forma, es posible clasificar, junto a Marcos Nobre (2013), el uso de la ideología neoliberal de manera pragmática y oportunista por parte de FHC, ya que, además de los factores ya mencionados, el gobierno utilizó instrumentos incompatibles con ortodoxia neoliberal (irresponsabilidad fiscal y rescate de empresas incapaces de competir en el mercado internacional). Al mismo tiempo, utilizó el discurso de la inevitabilidad del neoliberalismo para apoyar su proyecto de estabilización como ineludible y, con él, un proyecto económico-político para dismantelar el modelo nacional-desarrollista (Nobre, 2013). Como resultado, la estructura del Estado desarrollista cambió, pero los elementos del patrimonialismo se mantuvieron vigentes (Avritzer, 2019).

Lo que se creó, entonces, fue lo que Avritzer (2019, pp. 88-89) denomina “jabuticaba brasileño”, caracterizado por el “patrimonialismo liberal-financiero”, con énfasis en el Banco central (BC) como núcleo de la elaboración de políticas liberales pues “el núcleo financiero que allí se instaló representa una cierta mezcla de captura política con representación de los intereses del sistema financiero”, para que los integrantes del mercado financiero ocupen cargos relevantes dentro del Banco central y luego regresen a su lugar de origen en el sector financiero. Con ello se posibilita una visión y actuación estrictamente neoliberal del BC (Avritzer, 2019, nuestra traducción)³.

Dos transiciones tuvieron lugar secuencialmente en Brasil después de la decadencia del régimen militar. En primer lugar, el proceso de redemocratización siguió una estructura nunca antes vista, permitiendo una amplia participación popular en su primera fase y ampliando significativamente la carta de derechos. Como resultado de lo que Vieira (2018) llama *compromisso maximizador*, obtuvimos una constitución con carácter transformador, cuyo contenido establece normas programáticas, objetivos transformadores y una garantía sustancial de igualdad (Maués, 2019), indicando un compromiso con la democracia sustancial, no solo formal. Por otro lado, e inmediatamente después de la democratización, se siguió el camino hacia un neoliberalismo incipiente, con la presencia de fuertes elementos patrimoniales, que, en conjunto, no están comprometidos con la reducción de las desigualdades, ni con la concreción del carácter transformador del texto constitucional. Por el contrario, se organizan en oposición a apuestas inclusivas y redistributivas, viendo la democracia como un mero instrumento de estabilización política -con la alternancia de gobiernos sin trabas, vía el proceso electoral.

En este entorno, los compromisos democrático-sociales de la Constitución de

³ Según Avritzer (2019), la ocupación de posiciones importantes en el Banco central por miembros del mercado financiero consolidó un conjunto de visiones sobre el desempeño del BC, que involucran entender su misión como un mero controlador de inflación, sin ningún compromiso con el crecimiento económico; establecer un compromiso fuera de la legalidad institucional con el mercado financiero, expresado principalmente a través de los llamados 'arreglos extrajudiciales'; y adoptar una relación personalizada e institucional con el mercado

1988 se vuelven dependientes de la dirección adoptada por el gobierno de turno, que puede avanzar más o menos hacia el logro de los objetivos constitucionales transformadores. Esto es posible porque la estructura del Estado brasileño presenta elementos tanto patrimoniales como neoliberales, así como un embrión de sesgo social, demostrando que la sociedad capitalista en Brasil es heterogénea y desigual, encontrando canales de expresión en la estructura estatal y en el sistema político.

Aunque se pueden ver ciertos avances desde el punto de vista de la igualdad durante los gobiernos de izquierda (Nobre, 2013), los eventos políticos posteriores, asociados a la crisis económica y financiera internacional que impacta la economía brasileña y la secuencia de medidas de austeridad implementadas, pueden ser indicativo de que no hay lugar para la democracia en la sociedad neoliberal brasileña o que, de lo contrario, este lugar es minimalista y estrictamente formal. Para medir esta hipótesis es necesario hacer un balance de las orientaciones políticas adoptadas por gobiernos más de izquierda y con mayor inclinación a la agenda neoliberal, observando sus respectivos impactos sobre la (des)igualdad en la sociedad brasileña.

Del progreso izquierdo al avance *bolsonarista*: el retraso permanente de la democracia social

Antes de señalar específicamente las orientaciones implementadas por gobiernos de distintos matices ideológicos sobre la agenda neoliberal, es necesario recordar que la historia brasileña apunta a una consecuencia esperada de las crisis económicas: cambios en el espectro político. En los últimos años, esto ha sido moldeado por los profundos cambios ideológicos que han llevado al país de un largo ciclo dominado por el centro-izquierda a un gobierno de extrema derecha responsable de rechazar muchas de las políticas exitosas de sus predecesores.

Levinas (2020) explican este proceso desde la perspectiva de la lectura económica al reportar cómo diferentes gobiernos gestionaron la incidencia de la lógica de

financiarización en el sistema de protección social, lo que se verificará en este apartado desde el gobierno de Lula hasta el gobierno de Bolsonaro.

Arretche sostiene que la democracia por sí sola no promueve la reducción de las desigualdades y el logro de la igualdad, ya que estos avances requieren la adopción de políticas públicas, que requieren decisiones constantes sobre la gestión del gasto público y la gestión sobre la viabilidad y aplicabilidad de las políticas. De esta forma, la democracia establece un nivel mínimo que necesita ser promovido y decidido a nivel político a favor de las políticas sociales, con el objetivo de promover la reducción de las desigualdades en todos sus ejes (Arretche, 2015).

Lula fue elegido en 2002 a través de una alianza entre la clase trabajadora urbana y rural sindicalizada, funcionarios públicos de clase baja, sectores de los grupos de trabajadores informales, la burguesía nacional, oligarcas y terratenientes de las regiones más pobres del país. Estos diferentes grupos tenían pérdidas en común como resultado de la desindustrialización, privatización y regresiones sociales salariales y de servicio público adoptadas por FHC, como se demostró en el tema anterior (Saad Filho y Morais, 2018).

Esta victoria impactó la estabilidad de la vía neoliberal en el país liderada por la élite financiarizada, la clase media tradicional y los trabajadores informales, quienes se beneficiaron de las políticas de apertura económica. Ante la presión política y económica de la capa vinculada al neoliberalismo sobre la planificación del primer gobierno de Lula, este último señaló su adhesión al desarrollo del neoliberalismo al elevar, en 2003, la meta de superávit primario, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 3,75% del PIB a 4,25%, aumentando a 4,5% en 2004. Además, no actuó para intervenir en el aumento gradual de las tasas de interés por parte del Banco central, manteniendo la estabilidad política de su primer gobierno, así como afirmando un compromiso con las llamadas políticas neoliberales, poniendo fin a cualquier intento de cambios sociales radicales en el país (Saad Filho y Morais, 2018).

Por otro lado, y como forma de mantener su popularidad entre los estratos más pobres, Lula amplió los programas de asistencia social federal a través de *Fome Zero* -

política de distribución de alimentos- y, posteriormente, a través de Bolsa Família, además de la ampliación de la seguridad social, asistencia social y concesión de créditos a una gran masa de la población (Saad Filho y Morais, 2018).

El segundo gobierno de Lula estuvo marcado por lo que Saad Filho y Morais denominan “neoliberalismo desarrollista”, que sustenta los avances en el crecimiento económico y el PIB, en inversiones públicas y privadas, así como en la promoción de la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso. En este sentido, el PT, rodeado de un escenario interno e internacional de estabilidad y crecimiento económico, logró conciliar los intereses del capital con fuertes avances sociales (Saad Filho y Morais, 2018).

Los mayores impactos para la reducción de la desigualdad en el país bajo la administración de Lula fue la promoción del salario mínimo y la seguridad social como mecanismos de universalización e inclusión de los estratos más pobres. El salario tuvo un aumento real del 72% entre 2005 y 2012 y el salto en la empleabilidad pasó de 150.000 empleos, en su mayoría en el sector formal, a 500.000 anuales en los gobiernos de Lula, promoviendo la caída del desempleo y la estabilidad de la política salarial mínima (Saad Filho y Morais, 2018).

Entre 2003 y 2012 hubo un aumento en los ingresos salariales del 4,2% anual, resultado de un aumento del 4,6% anual en el ingreso familiar per cápita. Este avance fue aún más notorio en las regiones más pobres del país, con un aumento del 42% en los ingresos en el Nordeste frente al 16% en el Sudeste, lo que amplió el apoyo poblacional al gobierno del PT en esas regiones, proporcionando la universalización de las políticas y igualdad en los lugares más marginados (Saad Filho y Morais, 2018; Arretche, 2015).

Este diagnóstico está en línea con el entendimiento de Arretche de que la combinación de políticas como el *Programa Bolsa Família (PBF)*, el *Benefício de Prestação Continuada (BPC)* y las concesiones de pensiones del *Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)* fueron fundamentales para reducir la intensa desigualdad entre los más pobres y los más ricos. Esto demuestra que los protegidos por los salarios fueron los que más se beneficiaron de las políticas sociales del PT en las dos administraciones de

Lula (2003-2011), reflejando el descenso del 41% al 15% en el número de la población más pobre (Saad Filho y Morais, 2018; Arretche, 2015).

Desde una perspectiva de género y raza, hubo una equiparación entre los negros y las mujeres que dependían del salario mínimo entre 2003 y 2012, dado el aumento del 38% en el ingreso de las mujeres frente al 16% de los hombres, así como el crecimiento del 40% del de los hombres negros en comparación con un aumento del 20% de los blancos. Esto demuestra que la población más pobre está compuesta mayoritariamente por negros y mujeres y, por tanto, igualdad entre los dependientes del salario mínimo (Saad Filho y Morais, 2018; Arretche, 2015).

Todos estos avances no se ven cuando se elimina la protección de las políticas públicas sobre salarios y transferencias de ingresos, ya que a medida que disminuyó la población en situación de pobreza, se expandió la población de los nuevos pobres. Así, a pesar de los avances sociales en estos estratos, la desigualdad se mantuvo, ya que estas políticas no impactaron en la redistribución efectiva del ingreso, no modificaron las ganancias más ricas durante los gobiernos de Lula, preservaron la desigualdad de riqueza, así como también mantuvieron empleos precarios y mal remunerados, incluso si es formal. Así, las iniciativas de los gobiernos de Lula llegaron a la población miserable, sin cambiar la calidad de vida y la redistribución, rompiendo con la igualdad democrática sustancial (Saad Filho y Morais, 2018; Singer, 2018).

Lazzarato señala que la conducta de los gobiernos del PT se estructuró, por un lado, por su intento “social-desarrollista” que se estableció, sobre todo, a través de las políticas de salario mínimo y *Bolsa Família*. Por otro lado, orientó a la población hacia el consumo otorgando crédito a los más pobres. Esto establece una idea muy superficial de progreso social, pero que responde a los supuestos neoliberales, a través de la formación del sujeto endeudado, que recae sobre la población más pobre, intensificando la desigualdad. A diferencia de promover una reducción sustancial de la pobreza, el crédito propone la inclusión a través del financiamiento (Lazzarato, 2019).

El *Partido dos Trabalhadores* (PT) impulsó bases sólidas para el neoliberalismo ante la sustitución del programa social y la redistribución de la renta por parte del Estado

por una intensa privatización de los servicios de salud, educación y seguridad, destinando estas actividades al sector bancario financiarizado. La lucha contra la pobreza se llevó a cabo, aunque con grandes beneficios para los más pobres, estimulando el consumo, promoviendo la falsa inclusión e intensificando las desigualdades. En este sentido, el neoliberalismo fue instaurado y cultivado por el PT, consolidándose en un espacio ya abierto, promoviendo una democratización de las finanzas que afecte, sobre todo, a las poblaciones más pobres, impulsando lo privado, en detrimento de la centralidad democrática y pública (Lazzarato, 2019; Lavinias, 2017).

Las consecuencias de esto son que el equilibrio de las políticas públicas implementadas no logró igualar las demandas de las familias -especialmente las que se elevaron a las llamadas clases medias- de mayor bienestar y seguridad socioeconómica. Esto se debe a que, según Lavinias (2018), las políticas sociales de combate a la pobreza –como Bolsa Família– y el microcrédito son los principales mecanismos de financiarización de la pobreza en el mundo, ya que el beneficio que debe pensarse como asistencia termina funcionando como garantía de nuevos y agresivos vínculos con el sector financiero.

Mientras tanto, Lavinias (2018) sostiene que el *Partido dos Trabalhadores*, luego de su permanencia en el ejecutivo por cuatro elecciones consecutivas, descuidó a las clases medias, que se expandieron con la expansión de puestos de trabajo de hasta dos salarios mínimos, pero permanecieron vulnerables en el ante la imposibilidad de no tener satisfechas todas sus demandas y, principalmente, por la ausencia de una dotación pública en salud y educación capaz de posibilitar el flujo del capital alcanzado.

La consecuencia de las políticas sociales aplicadas por los gobiernos del PT, encaminadas a democratizar las finanzas, fue el proceso de endeudamiento de las familias que debían soportar los costos de permanecer en las clases medias, así como la tensión social derivada del mantenimiento de las desigualdades. Lo que explicó Cohn (2020) fue la integración de estas clases a través de políticas distributivas, sin cuestionar la esencia de las desigualdades socioeconómicas, a través de las políticas redistributivas de los activos económicos.

Es necesario, en este sentido, hablar de clases medias en plural, ya que es una clase diversificada que tiene en su corazón innumerables gradaciones de sensibilidad política y social. Estas clases medias se sintieron perjudicadas y son objeto de estudio del sociólogo Jessé Souza (2018), autor que las define como masas que se modelan por el miedo ante la posibilidad de la desclasificación social, dado que, en Brasil, la desclasificación representa marginación y la pérdida de derechos. Por tanto, las clases medias, por sus estructuras, se convierten en baluartes del florecimiento tanto de ideas de izquierda, como el sindicalismo y antiimperialismo, como de la predicación de derecha, como el autoritarismo estatal.

En muchos sentidos, el gobierno de Dilma fue la continuación de los mandatos de Lula (Nobre, 2013). Sin embargo, a diferencia de los gobiernos del líder obrero, que tuvieron un entorno externo favorable, especialmente desde el punto de vista económico, el gobierno de Dilma Rousseff, con un programa político más combativo de izquierda, no corrió la misma suerte. En primer lugar, porque la presidenta se puso en una posición de pulso tanto con las élites políticas dominantes (Nobre, 2013) como con el mercado financiero, al intentar implementar una política de desarrollo de base industrial y con fuertes conflictos con las élites rentistas y el Banco Central brasileño (Singer, 2018). Además, enfrentó dificultades en el mercado internacional, incluida la amenaza de una espiral inflacionaria en 2013 (Saad Filho y Morais, 2018), y fue socavada por escándalos de corrupción que involucran a algunos de sus principales aliados (Avritzer, 2019; Vieira, 2018). Ni siquiera los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC) lograron salvar la economía brasileña y el gobierno de Dilma, provocando el fin del mandato del presidente en medio de la crisis económica más fuerte registrada en la historia del país (Saad Filho y Morais, 2018).

El contexto económicamente caótico puso en tela de juicio los avances sociales del PT en la reducción de las desigualdades a través del financiamiento de las políticas públicas. A partir de 2014, el aumento significativo del déficit público implicó la intensificación de los conflictos distributivos y políticos, generando una crisis política con alcance en las calles y en el Congreso Nacional. Maués (2020) observa que, si bien

el gobierno de Dilma presentó propuestas para enfrentar el déficit público, ya se había establecido una articulación pemedebista para reducir drásticamente el gasto público, comprometiendo las políticas sociales desarrolladas en los gobiernos del *Partido dos Trabalhadores*.

La alternativa de la élite política conservadora vinculada al PMDB tuvo una adhesión significativa en el Congreso Nacional, lo que permitió tanto el juicio político de 2016 como la adopción de un nuevo régimen fiscal (Enmienda Constitucional nº. 95), marcando una ruptura con el compromiso constitucional de Sesgo transformador, basado en la reducción de la desigualdad y la implementación de los derechos sociales a través de la compatibilidad entre política tributaria y políticas públicas (Maués, 2020).

Directamente, los elementos antidemocráticos se hicieron evidentes con el golpe parlamentario del presidente electo. Esto se debe a que, además del proceso contradictorio en cuanto a su motivación, el reemplazo de la presidenta por su diputado, Michel Temer, indicó la desconexión entre elección y política pública (Avritzer, 2019), dado que la agenda del gobierno electo en 2014 fue alineados con el gasto público a través del financiamiento de las políticas sociales, mientras que el programa llevado a cabo por Temer significó la profundización de las medidas de austeridad y la intensa reducción de las inversiones públicas sociales.

Así, como el lulismo – término acuñado por André Singer (2018) – se desvaneció como una medida de apoyo a los más pobres y marginados, también se mitigó la lealtad ganada previamente en ciertos sectores, como en las propias clases medias, haciendo con que sus estratos más amenazados de proletarización se volcaron hacia la protesta y el voto desesperado a favor de un *insider* que se vendió, en las elecciones de 2018, como un *outsider* de la política.

El fin de la era del PT, marcado por el proceso de acusación de la presidenta Dilma Rousseff, así como el desmantelamiento que se implementó por la intensificación de la agenda neoliberal, dejó en claro que no hay una política social en Brasil que sea capaz, hoy, de prevenir eficazmente el retorno a la pobreza por parte de ciertos estratos de la sociedad.

Sin embargo, en la lectura de Cohn (2020), si para 2016 se produjo la construcción de un marco institucional inspirado, en algún momento, en el modelo de Estado de Bienestar post-1988, a partir de 2016 se observó su deconstrucción y, en 2019, la destrucción de ese marco. El autor atribuye la deconstrucción y posterior destrucción al radicalismo del proyecto neoliberal y al nuevo orden que representa. En este sentido, Fagnani refuerza que lo arcaico reapareció sin más vergüenza a través de una coalición política, financiera y empresarial, donde "(...) la utopía puede haber eclipsado la realidad, tan clara como el cristal, de que la democracia y la ciudadanía social son cuerpos absolutamente ajenos al capitalismo brasileño" (Fagnani, 2017, p. 17, nuestra traducción).

Sin embargo, hasta 2019, aún no era posible, a juicio de Cohn (2020), hablar de una destrucción de dicho marco social, dado que el discurso que basó las reformas implementadas a partir de 2016 no fue abiertamente agresivo, sino supuestamente enfrentando un desajuste fiscal, a través de la desconstitucionalización de los derechos sociales.

El juego, en 2019, se endurece; la destrucción de la red de seguridad social se vuelve truculenta. Ese pacto de solidaridad social consagrado en la Constitución de 1988 y que había sido modulado con grandes dolores, es roto por un diputado que fue elegido al efecto. En el gobierno de Jair Bolsonaro, los pobres son una vez más, y vorazmente, sin eufemismos, excluidos de la agenda pública. Cohn cita algunas de estas políticas reaccionarias cuando dice que Brasil ha vuelto al mapa del hambre; vio resurgir el brote de sarampión y la sífilis; además de la "culpa de los pobres por haberse atrevido a empezar a ocupar el mismo espacio que los no pobres, ya sea en los aeropuertos, Miami o en las universidades" (Cohn, 2020, p. 155, nuestra traducción).

Los mercados financieros aparecen en el corazón del proyecto de gobierno elegido en 2018, que permite a estos sectores tener libre acceso al control y definición de agendas económicas, que han vuelto a englobar también el ámbito de la política social. Un ejemplo clásico son los excesivos ataques y amenazas gubernamentales a la educación superior pública, cuya repercusión fue el aumento significativo e inmediato

del valor de las acciones de las grandes corporaciones del sector.

La presidencia de Bolsonaro, por tanto, fue consagrada por la aporofobia, es decir, en acciones encaminadas a sancionar a los más pobres, lo que ocurrió con restricciones arbitrarias al Beneficio Continuo en Efectivo - BPC -; con la disminución de la credibilidad del Programa Bolsa Família, al dirigir solo un porcentaje del 3% de las donaciones al Noreste frente al 76% al Sur / Sudeste, representando esa región el 36% de los pobres y extremadamente vulnerables en Brasil ; y, finalmente, con la Reforma de la Seguridad Social. Al respecto, es pertinente señalar que hoy el país cuenta con un presidente electo por un único fin político: el desmantelamiento de las políticas públicas y la colateralización de la política social.

Con Bolsonaro, la máxima absolutista “Je suis la Loi, Je suis l'État; l'État c'est moi” (Yo soy la ley, yo soy el Estado; ¡el Estado soy yo!) se resignifica en los actos, pero también en los discursos del presidente, que así se proclama “Yo realmente soy la Constitución” afronta una nueva era de destrucción de los derechos sociales en un contexto sólo, formalmente, democrático.

Por tanto, parece que el otrora improbable ascenso de Jair Bolsonaro como representante del país y su proyecto político, con el desmoronamiento de las políticas públicas sociales hasta ahora reivindicado, se convirtió en una realidad más concreta que Wanderley Guilherme dos Santos (2017) acusado de haber transformado la democracia brasileña: una democracia sin vergüenza de no ser democrática.

Una vez en el poder, el presidente Jair Bolsonaro lleva a cabo lo que Nobre (2020) denomina política de guerra y muerte, porque entiende como 'charlatanería' la noción de que la disputa política se desarrolla sobre un terreno común, compartido y compatible. Por el contrario, apoya una política en la que solo un bando puede sobrevivir y, por tanto, imposibilita la convivencia democrática. De esta manera, pasamos de la polarización a la guerra, comprometiendo la supervivencia democrática, lo que coincide con el objetivo de Bolsonaro de destruir la democracia y, durante la pandemia, cuesta miles de vidas (Nobre, 2020).

Desde el progresismo de izquierda hasta el avance *bolsonarista*, el rasgo

neoliberal estuvo presente, con mayor o menor acento y consolidándose como contrapunto a cualquier ensayo democrático más sustantivo. Si bien durante los gobiernos del PT se implementaron una serie de políticas públicas que permitieron una importante reducción de la pobreza extrema (Singer, 2018; Arretche, 2015) - demostrando un mayor compromiso con el embrión social-desarrollista de la constitución de 1988, el alineamiento con el neoliberalismo políticas del FMI y del Banco Central brasileño. En el momento en que la presidenta Dilma Rousseff presenta una posición más combativa tanto en relación a la élite política dominante en el Congreso Nacional como a la política económica estrictamente neoliberal del Banco Central, termina fracasando en mantener la estabilidad del gobierno, sufriendo un golpe parlamentario que lleva al poder una agenda de austeridad comprometida con la reducción del financiamiento de las políticas sociales. En el marco de la profundización del neoliberalismo, un candidato populista de derecha asciende a la presidencia con discursos contra las minorías y en cualquier nivel de inclusión y redistribución.

Así, la tendencia neoliberal en Brasil se presenta como un fuerte impedimento para la implementación de una democracia sustancialmente igualitaria, que se articula fácilmente en situaciones de crisis económica o amenaza al capital financiero para evitar el peligro, aunque signifique una ruptura política y un déficit democrático. Este escenario indica que el lugar de la democracia dentro de la sociedad neoliberal brasileña es muy pequeño y frágil, correspondiendo mucho más al aspecto electoral que al compromiso de reducir las desigualdades. E, incluso en lo que respecta al procedimiento electoral, los resultados de las urnas pueden encontrar dificultades cuando el gobierno no se alinea con la política neoliberal, como observamos con el juicio político de 2016.

Conclusión

La relación entre capitalismo y democracia es muy tensa, especialmente en la era neoliberal. Mientras que el neoliberalismo opera según la lógica de la justicia de

mercado, la democracia requiere de la justicia social para garantizar la igualdad política, elementos a los que se opone fuertemente el razonamiento del mercado, que observa a todo el aparato social como una patología que debe ser eliminada en nombre de la libertad del capital (Brown, 2019; Streeck, 2018). Aun así, la gran mayoría de los países occidentales combinan regímenes democráticos en el nivel político con el capitalismo neoliberal en el espectro económico, como si este último no implicara efectos directos en el arreglo social y político de una nación. Por tanto, este artículo pretende comprender, en el contexto de la sociedad neoliberal brasileña, cuál ha sido el lugar de la democracia, es decir, hasta qué punto ha sido tolerada y aceptada por las estructuras neoliberales.

A medida que el neoliberalismo se extiende por la estructura estatal, exigiendo un Estado fuerte en el sentido de proteger los intereses del mercado y débil en cuanto a la implementación de la justicia social, también alcanza un carácter subjetivo, fomentando un sujeto emprendedor, individualizado y competitivo (Dardot y Laval, 2016). En el escenario en el que el neoliberalismo se convierte simultáneamente en un sistema económico, político, cultural y social, la democracia ocupa un lugar cada vez menor, sufriendo corrosión y siendo avalada por el capitalismo neoliberal solo a nivel del proceso electoral, sin sustantividad en la reducción y combate desigualdades.

En Brasil, la introducción del neoliberalismo se produjo gradualmente y se sumó a otros elementos de la estructura estatal, como el patrimonialismo histórico y el reciente desarrollismo social surgido del proceso de redemocratización brasileño. Con la decadencia del régimen militar se sucedieron dos procesos de manera secuencial: por un lado, el surgimiento de la democracia, con una constitución de carácter transformador, y comprometida con la igualdad sustantiva; por otro, el momento posterior a la democratización estuvo marcado por un neoliberalismo incipiente, que se instauró bajo el discurso de la estabilización económica. Frente a una estructura estatal con tantos sesgos contradictorios, los compromisos constitucionales de carácter socialdemócrata se vuelven significativamente dependientes de las orientaciones adoptadas por el gobierno de turno, sobre todo porque el neoliberalismo y el patrimonialismo no apuestan por la inclusión y la redistribución, por el contrario, son fundamentales para generar

desigualdades.

Durante las últimas dos décadas, el Poder Ejecutivo brasileño ha alineado a ambos gobiernos con una agenda progresista, así como con una intensa austeridad. Sin embargo, en común entre todos fue la presencia de un sesgo neoliberal, más o menos marcado. En los gobiernos del PT, hubo una reducción significativa de la pobreza, que se llevó a cabo a través de políticas sociales, aunque la política económica neoliberal se expresó en la medida en que el gobierno se mantuvo vinculado a los intereses del FMI y del Banco central. Cuando el gobierno de Dilma enfrentó los efectos de la crisis financiera internacional y presentó una postura más combativa en relación a la dinámica neoliberal y la élite política dominante en el Congreso Nacional, luchó por mantenerse en el gobierno, sufriendo un polémico juicio político. Como resultado, la reducción de las inversiones sociales se reduce significativamente y un candidato que se opone públicamente al aparato social es elegido mediante elecciones.

En este sentido, fue suficiente que se cambiara el escenario económico, con el debilitamiento del boom de las materias primas y la experiencia de una crisis económicamente caótica, para que los avances en las políticas sociales implementadas por los gobiernos del PT -hasta entonces tolerado por los mercados financieros- para vaciarse, dando lugar a una política de deconstrucción que solo fue acogida de manera efectiva por el ataque a la democracia perpetrado por el juicio político al presidente electo en 2016. El golpe parlamentario, además del saldo negativo de ser antidemocrático y mostrar que a partir de esa ruptura ya no quedaría la seguridad de vincular elecciones y políticas públicas, inauguró una fase de profundización de las medidas de austeridad, que estuvo marcada por la deconstrucción del marco institucional inspirado, en cierto momento, en el modelo del Estado de bienestar.

Así, la democracia tiene dificultades para establecerse plenamente, debido a la constancia de la racionalidad neoliberal que reinaugura los conservadurismos, avalada por la lucha contra la justicia social que tanto busca el neoliberalismo. Tal escenario admite al régimen democrático solo desde un punto de vista electoral, pero dificulta de alguna manera mantener el compromiso con la igualdad sustantiva firmado en 1988.

Especialmente después del juicio político de 2016, la promesa democrática se hizo pequeña y dio paso a la truculência, la negación, el oscurantismo y la política de la guerra y la muerte.

Referencias bibliográficas

- Arretche, Marta (2015). Conclusões [Conclusiones]. En Arretche, Marta (ed.). *Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos*. UNESP.
- Avritzer, Leonardo (2019). *O pêndulo da democracia*. Editora Todavia.
- Barbosa, Leonardo Augusto de Andrade (2012). *História constitucional brasileira: mudança constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós-1964*. Câmara dos Deputados, Edições Câmara.
- Brown, Wendy (2019). *Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente* (Mario Antunes Marino e Eduardo Altheman C. Santos, Trad.). Editora Filosófica Politeia.
- Cohn, Amélia (2020). As políticas de abate social no Brasil contemporâneo. *Lua Nova*, São Paulo, v. 109, p. 129-160.
Recuperado de <https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/3948254>.
- Dardot, Pierre; Laval, Christian (2016). *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. (Mariana Echalar, Trad.). Boitempo.
- Fagnani, Eduardo (2017). *O fim do breve ciclo da cidadania social no Brasil (1988-2015)*. Unicamp.
- Fraser, Nancy (2015). *Fortunas del feminismo* (Cristina Piña Aldao, Trad.). Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
- Fraser, Nancy; Jaeggi, Rahel (2020). *Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica*. (Nathalie Bressiani, Trad.). Boitempo.
- Hayek, Friedrich von (1981). Democracia, El Mercurio, Hayek, Pinochet, Ronald

- Reagan. [Entrevista concedida a] Adrián Ravier. *El Mercurio*, Santiago do Chile.
- Harvey, David (2014). *O neoliberalismo: história e implicações*. (Adail Sobral y Maria Stela Gonçalves, Trad.). Edições Loyola.
- Lavinias, Lena (2017). Na contramão da financeirização: preservar a provisão pública no século XXI. *Fundação Oswaldo Cruz, Centro de Estudos Estratégicos, Futuros do Brasil: Textos para debate*, (5), pp. 1-9.
- Lavinias, Lena (2018). Há um clamor unânime e geral por renda básica de cidadania universal e incondicional. [Entrevista concedida a] Patrícia Facchin. *Instituto Humanitas Unisinos*. Recuperado de <http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/584990-a-garantia-do-estado-de-bem-estar-social-depende-de-elevar-fortemente-a-productividade-do-trabalho-entrevista-especial-com-lena-lavinias>.
- Lavinias, Lena (2020). Brasil diante da covid-19: é urgente superar a distopia [Brasil frente al covid-19: urge superar la distopia]. [Entrevista concedida a] Pablo Stefanoni. *Open Democracy*. Recuperado de <https://www.opendemocracy.net/pt/brasil-diante-da-covid-19-urgente-superar-a-distopia/>.
- Lazzarato, Maurizio (2019). *Fascismo ou revolução? O neoliberalismo em chave estratégica*. (Takashi Wakamatsu e Fernando Scheibe, Trad.). Edições.
- Magalhães, Breno Baía; Ferreira, Valeska Dayanne Pinto (2021). Com quantos golpes se faz uma crise constitucional no Brasil? Constitucionalismo abusivo, estresse constitucional e juridicidade constitucional. *Revista Direito e Práxis*, Ahead of print, pp. 1-40. Recuperado de <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/56229>.
- Maués, Antonio Moreira (2020). 30 anos de Constituição, 30 anos de reforma constitucional. *Revista Direito GV*, 16 (1), pp. 1-30. Recuperado de <https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/artigo/30-anos-de-constituicao-30-anos-de-reforma-constitucional>.
- Maués, Antonio Moreira (2019). Fundamentos do direito à igualdade na aplicação da lei.

- Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito*, v. 11 (1), pp. 44-57.
- Recuperado de
<http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2019.111.03>.
- Nobre, Marcos (2013). *Imobilismo em movimento: da abertura democrática ao governo Dilma*. Companhia das Letras.
- Nobre, Marcos (2020). *Ponto Final: a guerra de Bolsonaro contra a democracia*. Todavia.
- Saad Filho, Alfredo; Morais, Lecio (2018). *Brasil: neoliberalismo versus democracia*. Boitempo.
- Santos, Wanderley Guilherme dos. (2017) *A democracia impedida: o Brasil no Século XXI*. Editora FGV.
- Singer, André (2018). *O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período de Dilma (2011-2016)*. Companhia das Letras.
- Sitaraman, Ganesh (2018). Economic inequality and constitutional democracy (pp. 533-549). En Graber, Mark; Levinson, Sanford; Tushnet, Mark (Ed.). *Constitutional democracy in crisis?* Oxford University Press.
- Souza, Jessé (2018). *A classe média no espelho*. Estação Brasil.
- Streeck, Wolfgang (2018). *Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático*. Boitempo.
- Verbicaro, Loiane Prado (2021). Reflexões Acerca das Contradições entre Democracia e Neoliberalismo. *Revista de Direito Público (RDP): Dossiê “Direito ao Desenvolvimento, Estado Neoliberal e Políticas Públicas”* coordenado por Ana Elizabeth Neirão Reymão e Loiane Prado Verbicaro, 18 (97), jan./fev. 2021 pp. 23-51.
- Vieira, Oscar Vilhena (2018). *A batalha dos poderes: da transição democrática ao malestar constitucional*. Companhia das Letras.